

JUZGADO NOVENO DE FAMILIA

Bogotá D. C., 27 de octubre de dos mil veinte (2020)

Medida de Protección No. 265-2020

Radicado 2020-0283

A continuación, procede el despacho a desatar el recurso de apelación de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 294 de 1996, modificado por el artículo 12 de la Ley 575 de 2000, en concordancia con el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, previo las siguientes,

ANTECEDENTES

El señor JAVIER MAURICIO PATIÑO HERRERA acudió a la Comisaría Octava de Familia Kennedy IV de esta ciudad, poniendo en conocimiento los hechos de violencia física y verbal del que es víctima él y su progenitora GLORIA MARINA HERRERA JIMÉNEZ por parte de GILBERTO PATIÑO.

Instruidas las diligencias, mediante providencia de fecha 4 de junio de 2020, la Comisaría de conocimiento ordenó medida de protección a favor de JAVIER MAURICIO PATIÑO HERRERA y GLORIA MARINA HERRERA JIMÉNEZ contra GILBERTO PATIÑO.

Frente a la anterior decisión el accionado interpuso recurso de apelación manifestando que no tiene para donde irse.

Concedida la apelación, corresponde a este estrado judicial decidir lo pertinente.

CONSIDERACIONES

El artículo 4º de la ley 294 1.996, modificado por el artículo 1º de la ley 575 de 2.000, consagra: *“Toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico o psíquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá pedir sin perjuicio de las denuncias penales a que hubiere lugar, al Comisario de Familia del lugar donde ocurrieren los hechos y a falta de este, al Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal, una medida de protección inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión o evite que esta se realice cuando fuere inminente...”*.

El artículo 18 *Ibídem* prevé que contra la decisión definitiva sobre una medida de protección que tomen los Comisarios de Familia o los Jueces Civiles Municipales o Promiscuos Municipales, procederá en el efecto devolutivo, el recurso de apelación ante el Juez de Familia o Promiscuo de Familia.

Para resolver el tema se debe tener en cuenta que los actos de violencia se presentan en dos formas, el primero de ellos mediante el maltrato físico, cuando se ocasionan lesiones en el cuerpo, por medio de: *“golpes, quemaduras, estrangulamiento, entre otros; produciendo fracturas, lesiones temporales o definitivas, llegando en algunos casos hasta la muerte”*, y, el segundo se manifiesta a razón del maltrato psicológico con *“actitudes de desprecio, control, burla, vigilancia de los actos del otro y la toma de decisiones importantes sin consultar a la familia”*¹¹; los cuales, entendida su acepción más amplia, incluye todo género de acciones que afectan la dignidad humana de la víctima en todas y cada una de sus concreciones: respeto a la vida, integridad física y moral, libertad de locomoción y armonía síquica y emocional.

Igualmente, el maltrato comprende mucho más que el simple ejercicio de la violencia, aunque este aspecto será el más socorrido que el simple ejercicio en el orden efectual–probatorio, alcanzando toda una gama de comportamientos que denigran, desedifican, menosprecian, humillan, coartan o, sencillamente neutralizan el adecuado y libre desarrollo de la personalidad de la víctima, en el ámbito intrafamiliar.

Descendiendo al caso tenemos que el denunciante sostiene ha sido objeto de maltrato físico y verbal él su progenitora, por parte de su progenitor

GILBERTO PATIÑO, hechos que al ser puestos en su conocimiento no fueron aceptados.

El motivo de inconformidad del apelante está dado por que fue desalojado y no tiene para donde irse.

Sea lo primero decir que la argumentación desplegada en el asunto materia del presente pronunciamiento frente a los hechos de violencia intrafamiliar del que fueron JAVIER MAURICIO PATIÑO HERRERA y GLORIA MARINA HERRERA JIMÉNEZ, se compadece con la realidad probatoria que registra el expediente, pues no solamente está la declaración de los querellantes, al señalar que efectivamente ha sufrido amenazas de muerte y agresiones verbales, por parte del señor GILBERTO PATIÑO, hecho que no fue aceptado, pero de las declaraciones y los audios allegados al expediente que le fueran puestos en conocimiento al querellado, pudo observarse otra situación, como la amenaza con un cuchillo con la cual sin lugar a dudas, permite tener por acreditado los hechos expuestos por el quejoso, como lo hizo la comisaria A quo, quien tomó las pruebas en su conjunto, determinando la situación de maltrato que padecieron JAVIER MAURICIO PATIÑO HERRERA y GLORIA MARINA HERRERA JIMÉNEZ.

El material probatorio permite demostrar la responsabilidad del accionado ya que el hecho de proferir amenazas de muerte y agresiones verbales, son actos de violencia intrafamiliar, que fueron determinadas con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acontecieron los hechos relacionados por la víctima.

Ahora bien, es preciso resaltar que, si el accionado considera que la querellante lo agredió físicamente, no puede, so pretexto de defender sus derechos, acudir a las vías de hecho y hacer justicia por su propia mano, pues para esos están constituidas las autoridades a quienes por ley les corresponde investigar y sancionar las conductas contrarias a la ley y que en virtud de ello pueden adoptar las medidas preventivas que consideren necesarias para cada caso en concreto.

Puestas así las cosas para el despacho es claro sin lugar a dudas existió agresión proferida por el señor JESÚS ANTONIO RODRÍGUEZ PRADA a SANDRA MARINA HURTADO ÁLVAREZ, permite a este despacho considerar asertivo lo dispuesto por la comisaria de conocimiento en la decisión que fuera objeto de recurso, más cuando el solo hecho de proporcionar maltrato constituye ya una desproporción respecto de la forma de solucionar conflictos.

Ahora debe entender el accionado GILBERTO PATIÑO que la decisión tomada por la comisaria A quo, no debe considerarla arbitraria y caprichosa, pues precisamente lo que se quiere es que cesen los conflictos presentados con su hijo JAVIER MAURICIO PATIÑO HERRERA; medida que tiene respaldo en el artículo 5 de la Ley 294 de 1996, advirtiéndose igualmente que las órdenes dadas, resultan consecuentes con la idea de preservar la vida, la integridad física o la salud de los intervinientes, siendo la medida de desalojo impuesta necesaria en las actuales condiciones y así se deben entenderse en procura de evitar un mal mayor más adelante.

Ahora bien, la medida de desalojo no es capricho del funcionario a quo, sino que ella tiene respaldo en el artículo 5º de la misma disposición al señalar *“El funcionario podrá imponer, además, según el caso, las siguientes medidas: a) Ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte con la víctima, siempre que se hubiere probado que su presencia constituye una amenaza para la vida, la integridad física o la salud de cualquiera de los miembros de la familia; b) Ordenar al agresor abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde se encuentre la víctima, cuando a discreción del funcionario dicha limitación resulte necesaria para prevenir que aquel moleste, intimide, amenace o de cualquier otra forma interfiera con la víctima o con los menores, cuya custodia provisional le haya sido adjudicada; c) Prohibir al agresor esconder o trasladar de la residencia a los niños y personas discapacitadas en situación de indefensión miembros del grupo familiar, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar; d) Obligación de acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico en una institución pública o privada que ofrezca tales servicios, a costa del agresor cuando éste ya tuviera antecedentes en materia de violencia intrafamiliar; e) Si fuere necesario, se ordenará al agresor el pago de los gastos médicos, psicológicos y psíquicos que requiera la víctima; f) Cuando la violencia o maltrato revista gravedad y se tema su repetición el Comisario ordenará una protección temporal especial de la víctima por parte de las autoridades de policía, tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo, si lo tuviere; g) Cualquier otra medida necesaria para el cumplimiento de los propósitos de la presente ley.”*. Subrayado fuera del texto.

Con base en lo expuesto, el Juzgado concluye que debe confirmar en todas sus partes la resolución de fecha 4 de junio de 2020 proferida por la Comisaría Octava de Familia Kennedy IV de esta ciudad.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Noveno de Familia de Bogotá D.C., administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: Confirmar la providencia del 4 de junio de 2020 proferida por la Comisaría Octava de Familia Kennedy IV de esta ciudad.

SEGUNDO: Notifíquese esta decisión a las partes por el medio más expedito.

TERCERO: Devuélvanse las diligencias a la oficina de origen previa anotación de los libros radicadores.

NOTIFÍQUESE,

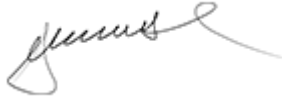
A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

CESAR ENRIQUE OSORIO ORTIZ

JUEZ

ESTADO 72

28-10-2020



TOMAS OLAYA GONZALEZ

secretario

[\[1\] www.esecarisma.gov.co/paginas/principal/violencia_intrafamiliar.html](http://www.esecarisma.gov.co/paginas/principal/violencia_intrafamiliar.html)